

Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de Vigo

Francisca Fariña Rivera
Esther González Pillado

Resumen

Este artículo se centra en el recientemente creado *Servicio de Mediación Familiar* en los Juzgados de Familia de Vigo. Para ello se lleva a cabo una reseña sobre la breve historia que la mediación tiene en Europa, para finalmente centrarse en la *Ley 5/2012 de mediación*. Además, se destacan las ventajas de la mediación familiar para las familias y especialmente para las personas menores de edad. Por último se aborda propiamente el *Servicio de Mediación Familiar de Vigo*, tanto su creación como el procedimiento de derivación y su actuación y protocolo.

Palabras Clave

Mediación familiar, servicio de mediación.

Abstract

The aim of this paper is the newly created Family Mediation Service in the Family Courts of Vigo. It is carries out a review about the brief history that mediation has in Europe and finally it focuses on the Law 5/2012, of mediation. Besides, it highlights the benefits of family mediation for families and especially for minors. Finally, the Family Mediation Service of Vigo is tackled, both its creation, derivation procedure and action and protocol.

Keywords

Family mediation, mediation service.

Francisca Fariña Rivera
Catedrática de Psicología Básica y Jurídica del menor

Esther González Pillado
Catedrática de Derecho Procesal
Universidad de Vigo

1. La mediación como medio de solución de conflictos

Ya desde hace algunos años se viene constatando que el proceso civil no se muestra como el instrumento más adecuado para resolver los problemas que surgen en el ámbito propio del derecho de familia; un ejemplo en este sentido son los conflictos que se generan en los supuestos de ruptura de pareja, matrimonial o no, y su posterior relación con los hijos. En efecto, los procesos contenciosos de separación o divorcio, o ruptura de parejas de hecho producen, salvo casos excepcionales, una sensación de insatisfacción en las partes que acuden al mismo; así, la agudización del conflicto interpersonal de los exmiembros de la pareja, el deterioro o incluso ruptura de las relación paterno-filiales, las dificultades derivadas de los incumplimientos del régimen de visitas o del pago de alimentos.

La crisis del proceso judicial¹ generó ya desde hace décadas un creciente interés por los mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias (Alternativa Dispute Resolution, ADR), que se han ido implantando en los países de tradición anglosajona desde los años 70. En época más reciente, ese interés se extendió por los países europeos continentales y ya desde los años 90 la Unión Europea también ha incluido dentro de sus prioridades, la incentivación de otros métodos alternativos o complementarios al proceso judicial.

Muestra de ello es la *Recomendación nº R (98)1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 21 de enero de 1998*, que, a la vista de las características específicas de los conflictos familiares, a saber: *“implican a personas que tienen relaciones interdependientes que continuarán en el tiempo; surgen en un contexto emocional*

difícil que los agrava, y tienen impacto sobre todos los miembros de la familia, en especial los niños”, y de las ventajas que ha demostrado la mediación en aquellos países en los que se ha implantado, recomienda a Gobiernos de los Estados miembros instituir o promover o, en su caso, reforzar la mediación familiar; y establece los principios básicos de su régimen jurídico. El objetivo perseguido es doble, de un lado, agilizar el trabajo de los tribunales de justicia; de otro, y de forma más relevante, la obtención de soluciones responsables, autogestionadas y eficaces de los conflictos que aseguren el posterior cumplimiento de los acuerdos.

Pero sin duda, la apuesta más clara de la Unión Europea por la mediación como medio de solución de conflictos ha sido la aprobación de la *Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo*, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuyo ámbito de aplicación no se limita al familiar, sino que se extiende a todas las cuestiones incluidas en el civil y mercantil.

En nuestro país, han sido las Comunidades Autónomas quienes han atendido, en un primer momento, las previsiones de la *Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa*, con la aprobación de disposiciones concretas para la resolución de conflictos familiares a través de la mediación. A nivel estatal, hasta el año 2012, la única referencia legal a la mediación familiar se contenía en la *Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil* en materia de separación y divorcio, cuya Exposición de Motivos declara que *“Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el*

diálogo, y en especial garantizar la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral". Esta Ley modifica los arts. 770.7 y 777.2 LEC, facultando a las partes para solicitar al juez, en cualquier momento del proceso de separación o divorcio, la suspensión del proceso para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto que dio lugar al proceso. A su vez, en la disposición final 3ª establece la obligación del Gobierno de *"remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso, en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad"*.

No sólo la Ley 15/2005 obligaba al Gobierno español a la aprobación de una ley de mediación, puesto que existía otro compromiso derivado del cumplimiento de la previsión contenida en el art. 12 de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que exigía a todos los Estados miembros la aprobación de una ley de mediación antes del 21 de mayo de 2011.

Con el objeto de cumplir los anteriores mandatos, el 19 de febrero de 2010, el Consejo de Ministros aprobó el *Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles*, pero habrá de esperarse hasta el 2 de marzo de 2012, para la aprobación del *Real Decreto-Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles*, y hasta el 6 de julio de 2012 para la aprobación por las Cortes de la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles².

La Ley 5/2012 se aplica de forma genérica a todo el ámbito civil y mercantil (art. 2), no habiendo norma alguna que excepcione su aplicación al derecho de familia³, lo que obligará a una revisión de las distintas normas de las Comunidades Autónomas actualmente vigentes que regulan la mediación familiar, que no podrán contradecir lo que, con carácter general, se recoge en la ley nacional.

De conformidad con el art. 1 Ley 5/2012, se entiende por mediación *"aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador"*.

Se trata de un concepto genérico en el que se significan los tres elementos esenciales de este medio de solución de conflictos: en primer lugar, su carácter voluntario, que se destaca en la propia Exposición de Motivos como el fundamento del

notas

¹ Debida al exceso de judicialización de los conflictos, a la inflación legislativa provocada por la aprobación constante de normas, al aumento de las cuestiones complejas de conflictos de leyes y de jurisdicciones, a una mayor conciencia de los ciudadanos para exigir sus derechos, y una mayor agilidad y eficacia del sistema jurisdiccional; cuestionamiento del sistema judicial que se ve además agravado por la actual crisis económica.

² La razón de la aprobación de un Real Decreto en el mes de marzo y posteriormente, una Ley en el mes de julio (con un contenido casi idéntico), se debió a la urgencia de su aprobación en cuanto la Comisión Europea había iniciado en julio de 2011 un procedimiento contra nueve Estados miembros, entre los que se encontraba España, ante la falta de cumplimiento del mandato de la Directiva 2008/52/CE. El procedimiento de infracción se inicia con un requerimiento de información, seguido de un requerimiento formal de cumplir el Derecho de la UE y, en el caso de no adoptarse medidas, la Comisión Europea puede enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

³ La inclusión de la mediación familiar quedaba a elección de los Estados miembros al trasponer la Directiva (Considerando 22).

modelo de mediación regulado en la misma⁴, además de incluirse en el Título II como el primero de los principios informadores de la mediación (art. 6.1 Ley 5/2012); en segundo término, se destaca el protagonismo de las partes a la hora de alcanzar un acuerdo; y finalmente, se resalta la importancia del papel del mediador.

A la vista del citado precepto, es claro que el legislador se decanta por un modelo de mediación facilitativa en la que el mediador tiene su papel limitado a crear un espacio de libertad y seguridad entre las partes para que las mismas puedan acercar sus posiciones para alcanzar un acuerdo por sí mismas, y sin que el mediador pueda proponer un acuerdo para su aceptación.

La mediación es por esencia extrajudicial, en cuanto se desarrolla en todo caso siempre fuera del proceso, de ahí que la Ley 5/2012 regule, en todo caso, el procedimiento de mediación extrajudicial, no obstante, esta misma norma legal trata de establecer una relación equilibrada entre el proceso judicial y la mediación en cuanto se trata de métodos de solución de conflictos que pueden ser no sólo alternativos, sino también complementarios entre sí.

Por ese motivo, la Ley 5/2012 modifica una serie de preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil para, entre otras cosas, permitir que, una vez iniciado el proceso judicial, las partes puedan recurrir a la mediación ya sea por iniciativa propia o por invitación del juez que está tramitando el proceso de que se trate, pudiendo, pedir la suspensión del proceso judicial mientras intenta alcanzar un acuerdo con ayuda del mediador. Se trata, en estos casos, de una mediación intrajudicial en cuanto está vinculada a un proceso judicial.

2. Ventajas

Como ya se ha adelantado en páginas anteriores, las disoluciones de parejas mediante procedimientos judiciales contenciosos conllevan consecuencias nocivas para la familia. Éstos convierten a las partes en adversarios, lo que impide una relación positiva entre ellos mientras se encuentre abierta la causa y, en la mayoría de los casos, también después. Así, se acrecienta el enfrentamiento entre sus miembros y la posibilidad de que las emociones y las cogniciones deletéreas se disparen, fomentando la percepción negativa de los miembros entre sí, en lugar de una apreciación objetiva (Allan, 2001). De esta forma, se incrementa el conflicto y con ello el estrés en la familia, facilitando el mantenimiento y aumento del desequilibrio emocional de toda la familia, lo que minimiza la capacidad de sus miembros para desarrollar y aplicar estrategias cognitivo-conductuales que les posibiliten superar la situación. Todo lo cual provoca, cuando hay hijos menores, que se instaure entre los progenitores un funcionamiento patológico entre ellos, que elimina toda posibilidad de lograr una labor de coparentalidad positiva. De este modo, el proceso resulta totalmente antiterapéutico, tanto para los progenitores como para los hijos y, en ocasiones, incluso iatrogénico.

Por el contrario, la disolución de las parejas a través de mediación facilita la pacificación de los conflictos y la resolución de la controversia (Holtzworth-Munroe, 2011), a la vez que posibilita adquirir habilidades relacionadas con la resolución de conflictos (Gutiérrez y Corzón, 2012). El proceso de mediación no sólo conlleva aprendizaje en la resolución de conflictos, sino también en la cultura de la paz; que los mediados pueden aplicar a problemas interpersonales futuros, en cualquier ámbito de su vida. Además, pese a no

ser una intervención terapéutica comporta efectos terapéuticos (Parkinson, 2005), ayudando a lograr o mantener la estabilidad emocional de los usuarios de la mediación (Bernal, 2012); al mismo tiempo que posibilita la cooperación parental (Barbero, Peña, Gaja y Galán, 2005; Fariña, 2010; Fariña, Seijo, Arce y Novo 2002) y el mantenimiento de relaciones familiares satisfactorias. En este sentido, Justicia, Cantón y Cortés (2007) aseveran *“constituye una forma de resolver las disputas en consonancia con la conceptualización del divorcio como proceso de reorganización del sistema familiar”*, permitiendo mantener la cordialidad entre los cónyuges. Cuando la pareja tiene hijos les ayuda a centrarse en las necesidades de éstos, y que pese a la ruptura como pareja, ambos sigan actuando como progenitores responsables (Fariña, Egido y Seijo, 2004; Martín, 1995), asumiendo sus obligaciones inherentes al hecho de ser padre o madre. Entre otras, garantizar el mejor interés de sus hijos (Barbero, Peña, Gaja y Galán, 2005); facilitar la cooperación con el otro progenitor, aspecto fundamental cuando se trata de una familia con descendencia (Fariña, 2010; Fariña, Seijo, Arce y Novo 2002).

Otra ventaja de la mediación es que se puede utilizar para concienciar a las partes sobre las repercusiones negativas que tiene en los hijos una separación conflictiva y litigiosa, y ofrecerles pautas de comportamiento que redunden en un logro más rápido de la superación del trauma, que siempre implica para los menores la ruptura de pareja de sus progenitores (Fariña y Arce, 2005). Todo lo cual favorece el mantenimiento de una relación fluida y de alta calidad con los hijos (Bernal, 2002). En este sentido, la literatura científica señala que los hijos se benefician de la mediación debido a que reduce la hostilidad y el conflicto entre los progenitores y conduce a acuerdos que son más favorables para

los niños (Landsman, Thompson y Barber 2003), y a una crianza más eficaz, ya que el conflicto parental desvía la atención de los hijos (Block, Block y Gjerde, 1988; Gerard, Krishnakumar, Buehler, 2006).

La mediación familiar, aparte de estos beneficios, que por sí solos serían suficientes para considerarla el procedimiento idóneo para llevar a cabo una separación y un divorcio, especialmente cuando la pareja tiene hijos; y del económico, tanto en tiempo como en dinero, también ya mentado, se encuentran otros. De esta manera, cabe significar el hecho de que las soluciones a la controversia y la toma de decisiones no recaen en extraños, sino en la pareja; ella es la verdadera protagonista, siendo ambos miembros quienes resuelven la situación conflictiva (Arch, 2003) y, de este modo, asumen el control sobre el proceso (Bailey y Robbins 2005). Además, la flexibilidad de la mediación permite que los mediados propongan soluciones diferentes y creativas, adaptadas a las necesidades de la familia, que pueden ser aceptadas por el otro; pudiendo acordar propuestas que les satisfagan a medio, corto y a largo plazo. Propuestas que, en muchos de los casos, difícilmente un decisor judicial podría establecer; no en vano, ambos, mejor que nadie, conocen las necesidades e intereses de su familia y la forma de cubrirlas y satisfacerlos. Aspectos que provocan una mayor motivación para resolver y superar el problema (Chen, 2006) al ser los acuerdos alcanzados percibidos como más justos (Welsh 2004) y satisfactorios (Saposnek, 1992; Wall y Dunne, 2012). Todo esto conduce a que el nivel de cumplimiento de

notas

⁴ Apdo. III Exposición de Motivos Ley 5/2012.

los mismos sea muy superior a los que se deben acatar por orden judicial. Esta contingencia facilita que no se instaure la judicialización en la relación después de la ruptura conyugal.

El carácter flexible de la mediación también se extiende al momento en el que se puede iniciar; si bien puede comenzarse en cualquier etapa del procedimiento, incluso después de haber emitido sentencia el tribunal, el más adecuado es antes de iniciar el proceso legal; pues todavía no se ha producido el enfrentamiento judicial de las partes, con el consabido aumento de hostilidad. Como señala Emery, Sbarra y Grover (2005) sólo un 11% de las parejas que utilizan la mediación, antes de iniciar el proceso judicial, acaban poniendo la demanda. Una vez iniciada la vía judicial el proceso se puede reconducir a una mediación por mandato del juez o deseo de las partes, cuando esto sucede estamos ante lo que se denomina mediación intrajudicial, la cual es también se muestra altamente efectiva, aunque en menor medida que la extrajudicial (Luquin, 2007).

Por último, la mediación respeta la privacidad de los usuarios, aspecto nada baladí; así, aunque durante el proceso de la mediación trascienda información muy íntima y comprometida, el mediador y las partes han de mantener la confidencialidad de la misma. Sin embargo, en un proceso contencioso se puede exhibir públicamente la intimidad de la familia, incluso aquellos aspectos más ignominiosos que toda persona prefiere mantener en el ámbito privado. Esto no sólo puede resultar bochornoso sino también cruel y humillante, lo que indefectiblemente magnifica la brecha en la relación, y como ya se ha señalado, dispara todos los pensamientos y sentimientos negativos hacia el otro progenitor, afectando, cuando no impidiendo,

una relación de coparentalidad positiva, en el presente y en el futuro.

3. Servicios de mediación institucionalizados

Desde el *Consejo General del Poder Judicial*, en cuanto órgano de gobierno de los jueces, y ante la evidencia de que la mediación resulta un método adecuado para resolver un número significativo de procesos judiciales en todos aquellos casos en que las partes deben continuar relacionándose en el futuro por tener intereses comunes (lo que encaja perfectamente en los procesos de familia), se están llevando a cabo, desde hace algunos años, una serie de iniciativas de fomento de la utilización de la mediación. Así, además de los numerosos cursos de formación dirigidos a los jueces y magistrados, también se ha procedido a la implantación de Servicios de Mediación especializados en determinadas localidades.

En todos los casos, se trata de Servicios de Mediación intrajudicial, esto es, vinculados a los tribunales, de tal forma que las partes que llegan con su “conflicto” al mismo, ya han iniciado el correspondiente proceso judicial.

Centrándonos en los Servicios de Mediación Familiar, son proyectos piloto de mediación intrajudicial que se amparan legalmente en las distintas previsiones legales que establecen que el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes de la posibilidad de acudir a la mediación para la resolución de la controversia y, en su caso, “invitarlas” a que acudan a una sesión informativa sobre la mediación ante el correspondiente Servicio. Podría pensarse que esa “invitación” del juez pudiera poner en entredicho la voluntariedad de la mediación, principio

consustancial a su propio concepto; no obstante, estamos ante una mera invitación que podrá ser atendida o no por las partes, siendo ellas las que voluntariamente decidirán no sólo acudir a esta primera sesión informativa sino también la aceptación de continuar con el proceso de mediación.

La remisión a la sesión informativa puede hacerse en todos los procedimientos de familia, sin limitación apriorística de los temas a mediar. Por citar algunos ejemplos, además de los conflictos derivados de la ruptura de pareja (matrimonial o no), también deberían incluirse los procesos sobre capacidad de las personas, en los casos de discrepancia en orden a la determinación de la idoneidad de unos u otros parientes para la asunción de funciones tutelares (tutor, curador, etc.).

4. La creación del Servicio de Mediación Familiar de Vigo

Como se expuso, los Servicios de Mediación se crean por iniciativa del *Consejo General del Poder Judicial* a través de correspondiente convenio con otra u otras Administraciones Públicas (autonómica, municipal o universitaria) o entidades (colegios profesionales directamente implicados en la mediación) que colaboran para su puesta en marcha, ya sea económicamente o facilitando profesionales especializados en mediación.

En lo que respecta a Galicia, los Servicios de Mediación Familiar están financiados por la Xunta de Galicia y se pusieron en marcha mediante la firma de convenios de colaboración multilaterales en los que participó también la *Fiscalía Superior de Galicia*; ahora bien, mientras en las ciudades de Santiago de Compostela y Ourense se convenió con los *Colegios Oficiales de Psicólogos de Galicia* y

de Abogados de sendas ciudades, en Vigo ha sido la Universidad de Vigo quien asumió el reto de la efectiva implantación de este Servicio.

En efecto, centrándonos ya en el *Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de Vigo*, el mismo ha sido creado por Convenio firmado, el 19 de septiembre de 2012, entre el *Consejo General del Poder Judicial*, la Xunta de Galicia, la *Fiscalía Superior de Galicia* y la *Universidad de Vigo*, asumiendo la responsabilidad de la gestión del Servicio los Grupos de Investigación de Derecho Procesal (DL1) y de Psicología (PS1), liderados por Esther González Pillado, Catedrática de Derecho Procesal y Francisca Fariña Rivera, Catedrática de Psicología Básica y Jurídica del Menor, respectivamente.

De acuerdo con lo recogido en el Convenio, la labor de gestión del Servicio supone, de un lado, la designación de las personas integrantes (tanto titulares como suplentes) del equipo de mediación intrajudicial de entre los/las profesionales inscritos/as en el *Registro de Mediadores Familiares de Galicia*, seleccionando a aquellas personas que por su formación específica y experiencia se consideren más idóneas. En todo caso, el equipo está formado por un jurista y un psicólogo que cumplen todas las condiciones enumeradas en el Convenio, así como el estricto régimen de incompatibilidades previsto.

De otro lado, la labor de gestión también exige garantizar la formación y capacitación de los profesionales que integren el equipo de mediación, así como el control y supervisión de la actividad desarrollada. Finalmente, se asume un compromiso de impartición de cursos y seminarios para formar profesionales en materia de mediación familiar.

La firma de este Convenio así como la efectiva puesta en marcha del Servicio contó desde su ini-

cio con el apoyo del *Decano de los Jueces de Vigo* así como de las *Juezas de Familia de Vigo*, cuyo papel, como se expondrá en el apartado siguiente, es esencial para su adecuado funcionamiento.

Debe señalarse que por todas las partes implicadas en la firma del Convenio se decidió que la sede del *Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de Vigo* debía estar situada fuera de las dependencias judiciales a efectos de que el ciudadano percibiese ese Servicio como algo distinto y ajeno al proceso judicial, aunque vinculado al mismo.

5. Procedimiento de derivación al Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de Vigo

Esencial para el adecuado funcionamiento del *Servicio de Mediación Intrajudicial Familiar de Vigo* es el establecimiento de un procedimiento claro de derivación que respete, de un lado, los principios propios de la mediación y, de otro, que las partes no sufran, en ningún caso, un retraso en la resolución de la controversia por el hecho de que el órgano judicial decida la derivación.

Precisamente para garantizar lo expuesto en las líneas anteriores, se elaboró por los implicados en este proyecto piloto un protocolo de derivación al Servicio de Mediación Intrajudicial Familiar de Vigo, que fue aprobado por unanimidad, el 18 de octubre de 2012, por la Junta Sectorial de Jueces presidida por el Sr. Decano de los Jueces de Vigo y con la participación de las Magistradas titulares de los dos Juzgados de Familia de esta ciudad.

Se parte en este protocolo del necesario respeto a los principios esenciales de la mediación familiar; a saber, la voluntariedad de las partes en la acep-

tación del proceso de mediación y la confidencialidad. En cuanto a la información utilizada en los procesos de mediación permanecerá reservada y únicamente se informará de la consecución del acuerdo, además, si la mediación no continúa por desistir cualquiera de las partes, exclusivamente se informará al juez de este hecho, que carecerá de toda incidencia en el enjuiciamiento posterior. Solamente, como señala la directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo, la confidencialidad no tendrá lugar “cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona”. En este orden, La ley 5/2012, también precisa cuando la confidencialidad no tiene lugar en dos supuestos: “a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad. b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal. Por ello, en el protocolo se recoge la obligación del mediador de informar al Juez o al Ministerio Fiscal de los datos que puedan revelar la existencia de una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona o de hechos delictivos perseguibles de oficio.

Por otra parte, el protocolo establece que se interrumpirá la mediación ante cualquier indicio de violencia o intimidación; así como la necesidad de homologación judicial del acuerdo cuando el mismo se refiera a materias no disponibles para las partes.

En lo que respecta al concreto procedimiento de derivación al Servicio, la misma podrá ser realizada por cada Magistrada de Familia, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, por éste mismo en los expedientes previos de menores o incapacita-

ciones y tutelas, o por el Secretario Judicial en los procedimientos de formación de inventario recogidos en el art. 808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o en aquellos otros en los que la Ley le atribuya competencias.

La derivación se realizará señalando día, hora y lugar de la sesión informativa y se realizará en el momento que el órgano judicial estime oportuno siempre que las partes estén personadas.

Con carácter general se intentará aprovechar los tiempos intermedios del proceso para evitar retrasos en aquellos supuestos en que las partes decidan no acudir a la sesión informativa o no se llegue a un acuerdo en la mediación que evite la continuación del proceso. Así en los procesos matrimoniales se hará la derivación en la providencia en que se tenga por contestada la demanda y se señale el juicio, debiendo celebrarse la sesión informativa y, en caso de aceptación, toda la mediación en el tiempo previsto entre el señalamiento de la vista y su celebración (normalmente, sobre unos 2 meses). Sólo en último caso, se solicitará por la representación de ambas partes, la suspensión del proceso en curso.

6. Actuación del Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de Vigo

Derivado el asunto al *Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de Vigo*, con la correspondiente citación de las partes del proceso a la sesión inicial de la mediación, las situaciones que se pueden plantear en la práctica son varias:

a) las partes no asisten, lo que supondrá que el proceso seguirá su curso ordinario.

b) las partes, acompañados de sus letrados o no, acuden a la sesión donde el equipo de mediación se presentará, indicando cuál es su formación y experiencia en materia de mediación, y les informará sobre las ventajas de este medio de solución de conflictos, de cómo es el procedimiento, así como de la gratuidad del Servicio. Lo que acompañan con la entrega de un tríptico informativo, en el que se destacan las ventajas de la mediación familiar. En aquellos casos en los que la pareja tiene hijos menores, además se les ofrece otro que tiene por objeto concienciarlos de lo perjudicial que resulta el conflicto para éstos, y lo beneficioso que les puede resultar la mediación.

En todos los supuestos las partes pueden aceptar o no la mediación. Si no la aceptan se actuará de la forma prevista en el apartado anterior, continuándose con los trámites ordinarios del proceso. En cambio, si las partes deciden intentar la mediación, se iniciará la actuación del equipo de mediación.

En cualquier caso, tanto si la mediación es aceptada como si no, el equipo de mediación tiene que comunicar al Juzgado de Familia cuál ha sido la decisión de las partes.

La primera actuación del Equipo de mediación, una vez aceptada la mediación, es la celebración de la sesión constitutiva de la que se levantará acta que firmarán las partes y el Equipo; en el acta deberá constar: a) la identificación de las partes; b) el equipo de mediación; c) el objeto del conflicto que se somete a mediación; d) el programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación; e) la información de la gratuidad de la mediación; f) la declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y

de que asumen las obligaciones de ella derivadas; g) el lugar de celebración y la lengua del procedimiento.

Tanto a la sesión inicial como en la constitutiva las partes estarán asistidas, si así lo estiman oportuno, por sus letrados quienes, en cambio, no estarán presentes en el proceso de mediación. En todo caso, siempre deberá ser el letrado quien presente el convenio regulador o someta el acuerdo parcial a la homologación del Juzgado, sin que sea necesario que los mediadores den traslado del acuerdo al/a la juez/a con independencia del convenio regulador.

En los supuestos en que se vean afectados menores por el conflicto objeto de mediación, no se considera necesario que éstos intervengan en el proceso de mediación, sólo excepcionalmente, cuando el Equipo de mediación lo estime oportuno a la vista de la utilidad de tal intervención.

En cuanto al papel del equipo de mediadores cuando las partes tienen hijos menores de edad, debe señalarse, que de manera imparcial, han de ayudar a las partes a llegar a acuerdos justos y duraderos, especialmente en lo que atañe al bienestar de los hijos (Moore, 1998; Fariña, Arce, Novo y Seijo, 2013; Saposnek, 1983). En esta línea, algunas legislaciones, como la que regula la mediación del Estado de Wisconsin, requiere que el mediador certifique si los acuerdos logrados respetan el mejor interés del menor (Milne, Folberg y Salem, 2004). Igualmente, en la comunidad autónoma de Galicia, La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, establece que la mediación familiar tendrá como finalidades, entre otras “Asegurar la protección del interés superior de la o el menor y su bienestar y favorecer la responsabilidad parental compartida”.

Finalizado el proceso de mediación, los acuerdos, ya sean totales o parciales, quedan reflejados en el acta de acuerdos y de finalización del proceso, la cual se firma por las partes y el equipo de mediación; posteriormente éste se la hace llegar al juzgado de referencia. Igualmente, de no existir acuerdos comunicará al Juzgado el resultado. Por último, los mediados cubren una encuesta de satisfacción sobre el servicio, la cual es de suma importancia para poder evaluar la calidad del mismo.

7. Comentario Final

Un artículo publicado el año pasado en la revista *Negotiation Journal* sobre el estado de la cuestión en la investigación sobre mediación, se afirmaba “La aspirina y la mediación tienen mucho en común: ellas son bien conocidas y se les reconoce fácilmente; ambas se han utilizado durante siglos; numerosos artículos se han publicado sobre las dos. Ambas funcionan, pero no sabemos por qué” (Wall y Dunne, 2012, p.218). En este punto, queremos señalar que podemos asumir mayoritariamente la afirmación; sin embargo, en nuestro caso, sí sabemos porqué la mediación familiar intrajudicial en los juzgados de familia de Vigo funciona, pudiéndolo resumir como sigue: las personas que median creen en la mediación, y consideran que su trabajo es de suma importancia y trascendencia para las familias con las que se media; poseen una formación sólida, y dominan las técnicas y habilidades que se requieren en un buen mediador; utilizan un protocolo adecuado; y desempeñan su trabajo de una manera comprometida y honesta.

Es muy largo todavía el camino que se ha de recorrer para lograr que la mediación extra e intrajudicial sea la práctica común en los procesos de

separación y divorcio; pero sin duda el apoyo de las administraciones y el buen hacer de los profesionales hará más fácil y más corta la senda.

BIBLIOGRAFÍA

- Arch, M. (2003). *¿Os vais a separar? Padres e hijos ante la ruptura familiar*. Barcelona: Tibidabo Ediciones.
- Allan, A. (2001, Noviembre). *Therapeutic jurisprudence in familylaw*. Comunicación presentada en la Family Court of Western Australia's In the Child's best Interest' Conference. Recuperado de http://www.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/178294/19_Allan_TJ_Fam_Court.pdf
- Bailey, J.D. y Robbins, S. (2005). Couple empowerment in divorce. A comparison of mediated and nonmediated outcomes. *Conflict Resolution Quarterly*, 22(4), 453–472.
- Barbero, T., Peña, E., Gaja, I., y Galán, C. (2005). *Modificación del código Civil y la Ley de Enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio: La nueva Ley del divorcio*. Madrid: Grupo difusión.
- Bernal, T. (2002). *La mediación. Una solución a los conflictos de ruptura de pareja*. Madrid: Editorial Colex.
- Bernal, T. (2012). *La mediación en escena*. Madrid: EOS.
- Block, J., J.H. Block, P.F. Gjerde (1988). Parental functioning and home environment in families of divorce: Perspective and concurrent analyses. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 27, 207-213
- Chen, H. (2006). The mediation approach: Representing clients with mental illness in civil commitment proceedings. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 19(3), 599–612.
- DIRECTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Diario Oficial de la Unión Europea, 136/3-136/8.
- Emery, R. E., Sbarra, D., y Grover, T. (2005). Divorce mediation: Research and Reflections. *Family Court Review*, 43, 22-37.
- Fariña, F. (2010). La mediación familiar, un derecho y una necesidad. En F. Fariña, R. Arce, M. Novo y D. Seijo (Eds.). *Separación y divorcio: interferencias parentales* (pp. 207-224). Santiago de Compostela: Nino.
- Fariña, F., Egido, A., y Seijo, D. (2004, Julio). *La autoridad parental, una oportunidad para los hijos de padres separados*. Comunicación presentada en el I Congreso de Psicología Jurídica, Santiago de Compostela.
- Fariña, F., y Arce, R. (2005). La mediación familiar: Una alternativa extrajudicial para resolver rupturas de pareja. En J. M. Suarez (coord.). *Perspectiva Pedagógica. Mediar para resolver conflictos* (pp. 69-81). Lugo: Axac.
- Fariña, F., Arce, R., Novo, M. y Seijo, D. (2013). La justicia terapéutica una oportunidad para controlar la violencia en la ruptura de pareja. En Colin, S. P., García-López, E., Morales, L. A. (Coords). *Ecos de la violencia. Voces de la reconstrucción* (pp. 73-94). Morelia: Universidad de Morelia.
- Fariña, F., Seijo, D., Arce, M., y Novo, M. (2002). *Psicología jurídica de la familia. Intervención en casos de separación y divorcio*. Barcelona: Cedecs.
- Gerard J. M., Krishnakumar, A, y Buehler C. (2006). Marital conflict, parent-child relations, and youth maladjustment: a longitudinal investigation of spillover effects. *Journal of Family Issues*, 27, 951-975.
- González E., (2011). Principios básicos del proceso de mediación familiar en la legislación autonómica. En H. Soletto (Dir.). *Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos* (pp.357 a 368). Madrid: TECNOS.
- Gutiérrez, E. y Corzón, F. (2012). Aspectos psicosociales. En Souto, E. (Dir). *Mediación Familiar* (pp. 257-306). Madrid: DYKINSON, S.L.
- Holtzworth-Munroe, A. (2011). Controversies in divorce mediation and intimate partner violence: A focus on the children. *Aggression and Violent Behavior*, 16, 319-324.
- Justicia, M^a D., Cantón, J., y Cortés M^a R. (2007). Tipos de custodia, interferencias e intervención. En J. Cantón, M^a R. Cortés, y M^a D. Justicia (Eds.). *Conflictos entre los Padres, Divorcio y Desarrollo de los Hijos* (pp. 207-241). Madrid: Pirámide.
- Landsman, M. J., Thompson, K., y Barber, G. (2003). Using mediation to achieve permanency for children and families. *Families in Society*, 84(2), 229–239.
- LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación

y divorcio. BOE, 163, 24458-24461. Recuperado de <http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/09/pdfs/A24458-24461.pdf>

Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. DOGA, 134, 19306-19372

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. BOE, 162, 49224-49242.

Luquin, R. (2007). Teoría y práctica de la mediación intrajudicial en España: algunos factores de eficacia de la mediación en conflictos familiares. *Estudios de Derecho Judicial*, 136, 13-66.

Martín, M^a. G. (1995). *Solución extrajudicial de los conflictos. Mediación familiar. Mediación: Una alternativa extrajudicial*. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos, Delegación de Madrid.

Milne, A. L., Folberg, J., y Salem, P. (2004). The evolution of divorce and family mediation: An overview. En J.Folberg, A. L.Milne, y P.Salem (Eds.). *Divorce and family mediation: Models, techniques, and applications* (pp. 3-25). Nueva York: Guilford.

Moore, C. W. (1998). *O processo de mediação. Estratégias práticas para a resolução de conflitos*. Porto Alegre: ARTMED.

Parkinson, L. (2005). *Mediación familiar: teoría y práctica: principios y estrategias operativas*. Barcelona: Gedisa.

Saposnek, D. (1992). Clarifying perspectives and mandatory mediation. *Family and Conciliation Courts Review*, 30(4), 490-506.

Wall, J. A. y Dunne, T. C. (2012). State of the Art. Mediation Research: A Current Review. *Negotiation Journal*, 28, 217-244.

Welsh, N. A. (2004). Remembering the role of justice in resolution: Insights from procedural and social justice theories. *Journal of Legal Education*, 54(1), 49-59.